

Santiago, catorce de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS

La Defensoría Penal Pública, dedujo recurso de queja contra de los Ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. María Teresa Díaz Zamora, Sra. Ana Cienfuegos Barros y Sr. Danilo Quezada Rojas, quienes acogieron el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, de 3 de noviembre de 2023, por la que se condenó a Omar Joao Fernández Lafferti, a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su intervención en calidad de autor en un delito consumado de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en contra de Sergio Fabián Pérez Reyes, hecho acaecido el día 3 de diciembre de 2020, en la comuna de Puente Alto.

Explica el quejoso que el Ministerio Público interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia condenatoria señalada precedentemente, alegando que en dicho fallo concurría el motivo absoluto de nulidad previsto en la letra e) del artículo 374, con relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, en tanto la sentencia definitiva no se ha hecho cargo de la fundamentación de sus conclusiones en los términos que exige el artículo 297 del Código Procesal Penal. En concreto el recurrente alegó que se habría vulnerado el principio de razón suficiente y no contradicción, toda vez que en la sentencia se le otorga una valoración superior a la declaración del acusado calificándola de conformidad al



artículo 68 bis del Código Penal, lo que ciertamente produce una distorsión en la determinación judicial de la pena, infringiendo el principio de la razón suficiente y de esta forma, se vulneran los Como petición concreta se solicitó acoger el recurso de nulidad e invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva dictada en él, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio conocido por el Tribunal no inhabilitado que corresponda, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal.

Añade que ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el recurso de nulidad fue admitido a tramitación bajo el Rol N° 3426-2023-Penal, y luego del trámite de rigor, y con fecha 9 de enero de 2024 en sentencia que motiva el presente recurso, los miembros de la Quinta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel decidieron acoger el recurso de nulidad en los siguientes términos: *“de conformidad con lo preceptuado en los artículos 297, 342 letra c), 352, 372, 374 letra e), y 384 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto en los autos RIT 338-2022, sólo en cuanto califica, en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, la circunstancia atenuante del N° 9 del artículo 11 del mismo cuerpo legal y, en consecuencia, condena a Omar Joao Fernández Lafferti a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor de un delito consumado de homicidio simple, la que se invalida sólo en esa parte, dictándose a continuación, y sin vista previa, la respectiva sentencia de reemplazo”*.



El sentenciador acto seguido dictó sentencia de reemplazo, resolviendo “*Y visto lo dispuesto en los artículos 68 y 69 del Código Penal y en los artículos 384 y 385 del Código Procesal Penal, se condena a Omar Joao Fernández Lafferti, cédula nacional de identidad N° 17.926.066-2, ya individualizado, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de homicidio simple en la persona de Sergio Fabián Pérez Reyes, perpetrado el 3 de diciembre de 2020 en la comuna de Puente Alto.*”

Sostiene el quejoso que en la sentencia, los integrantes de la Quinta Sala extendieron su decisión a puntos no solicitados por el recurrente de nulidad, lo que constituye infracción a la norma del artículo 360 del Código Procesal Penal.

Sostiene que el recurrente, solicitó en concreto que se invalide el juicio oral y la sentencia definitiva dictada en él, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio conocido por el Tribunal no inhabilitado que corresponda, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal.

Agrega que el referido artículo 360 del Código Adjetivo señala que el sentenciador no puede extender su fallo a puntos no solicitados por el recurrente, salvo lo previsto en el mismo artículo y lo establecido en el artículo 379 del Código Procesal Penal. En el primer caso, se trata de si solo uno de los imputados acusados por el mismo delito entabla recurso contra la resolución, la decisión favorable puede afectar a los demás. Y en el caso del artículo 379 del mismo cuerpo legal, se señala que una vez interpuesto el recurso no se podrá invocar nuevas causales, con la excepción de la función de oficio de la Corte que podrá



acoger el recurso que se hubiere deducido en favor del imputado por un motivo distinto del invocado por el recurrente, siempre que aquél fuere alguno de los señalados en el artículo 374 en el Código

Concluye que ninguna de estas dos hipótesis se da en la resolución que motiva este recurso, toda vez que el sentenciador fuera de un caso permitido por la ley extiende el fallo a puntos no solicitados por el recurrente, y que por cierto no formaron parte del debate de la vista del recurso, para invalidar la sentencia de manera parcial, y acto seguido, dictar sentencia de reemplazo.

Añade que existe una infracción a lo establecido en el artículo 385 del Código Procesal Penal. A su turno, la sentencia que motiva el presente recurso infringe lo establecido en el artículo 385 del citado código, toda vez que, acogiendo la causal de nulidad alegada por el Ministerio Público del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, dispone anular solamente la sentencia pronunciada por el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, fuera de los casos expresamente permitidos.

Solicita al finalizar, dejar sin efecto la resolución que cometió la falta o abuso, declarando que la sentencia impugnada ha sido pronunciada incurriendo en falta o abuso grave, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta presentación, y haciendo uso de sus facultades disciplinarias, disponga las medidas que estime pertinentes para el restablecimiento del imperio del derecho, invalidando dicha sentencia.

Informando los recurridos, señalan que, manera llegamos a la convicción de que la sentencia había incumplido la exigencia de la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, tanto porque no contenía una exposición clara, lógica y



completa de los hechos y circunstancias que se tuvieron por demostrados y, en cuyo mérito, se calificó la circunstancia modificatoria de responsabilidad del N° 9 del artículo 11 del Código Penal, como porque carecía de fundamentos en esta parte, atendido que la indicada discordancia priva al fallo de las motivaciones en que se asientan sus conclusiones.

Asimismo, establecieron que dicha contravención supone, a su vez, el quebrantamiento del artículo 297 del primer código citado, pues la discordancia anotada transgrede el principio lógico de no contradicción.

Agregan que aun cuando entienden que al acoger el recurso de nulidad en comento se limitaron a ejercer las atribuciones que les son propias, reconocen que al dictar el fallo de reemplazo incurrieron en un error, pues en lugar de obrar del modo indicado debieron remitir los antecedentes al tribunal no inhabilitado que correspondía para los efectos de que se procediera a la realización de un nuevo juicio y al pronunciamiento de un nuevo fallo.

Se ordenó traer los autos en relación.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la resolución que motiva la queja es aquella dictada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que conoció del recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, denunciando un motivo absoluto de nulidad previsto en la letra e) del artículo 374, con relación al artículo 342 letra c) y 297 del Código Procesal Penal, en tanto la sentencia definitiva no se ha hecho cargo de la fundamentación de sus conclusiones en los términos que exige el artículo 297 del Código Procesal Penal, solicitando la anulación del juicio



oral y la sentencia definitiva dictada en él, a fin de que se lleve a efecto un nuevo juicio conocido por el Tribunal no inhabilitado que corresponda, todo ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 386 del Código Procesal Penal.

Resolviendo el recurso los recurridos, con fecha 9 de enero de 2024 en sentencia que motiva el presente recurso, los miembros de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, decidieron acoger el recurso de nulidad en los siguientes términos: *“de conformidad con lo preceptuado en los artículos 297, 342 letra c), 352, 372, 374 letra e), y 384 del Código Procesal Penal, se acoge el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos mil veintitrés, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto en los autos RIT 338-2022, sólo en cuanto califica, en los términos del artículo 68 bis del Código Penal, la circunstancia atenuante del N° 9 del artículo 11 del mismo cuerpo legal y, en consecuencia, condena a Omar Joao Fernández Lafferti a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor de un delito consumado de homicidio simple, la que se invalida sólo en esa parte, dictándose a continuación, y sin vista previa, la respectiva sentencia de reemplazo.”* Para acto seguido dictar sentencia de reemplazo, aumentando la pena a diez años y un día.

SEGUNDO: Que, se debe tener presente que este arbitrio procesal es improcedente en contra de una sentencia que se pronuncia sobre un recurso de nulidad, por aplicación de la clara e imperativa norma del artículo 387 del Código Procesal Penal, toda vez que dispone: *“Improcedencia de recursos. La resolución que fallare un recurso de nulidad no será susceptible de recurso alguno, sin*



perjuicio de la revisión de la sentencia condenatoria firme de que se trata en este Código.”.

Que la referida norma, no deja margen a dudas ni permite interpretaciones alejadas de esa prohibición, plenamente concordante con la historia del precepto, engarzada en los principios y fundamentos de la reforma procesal penal contenida en el Código del Ramo. Por dicho motivo es que, como se dirá en lo resolutivo, se deberá rechazar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza** el recurso de queja interpuesto por la Defensoría Penal Pública, en contra de la sentencia de nueve de enero de dos mil cuatro, pronunciada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el ingreso N° 3.426-2023.

Sin perjuicio de lo resuelto y en uso de las atribuciones que posee esta Corte, se procederá a **actuar de oficio**, según las siguientes consideraciones:

1°) Que, el inciso 1° del artículo 385 del Código Procesal Penal dispone que: *“La Corte podrá invalidar sólo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley, si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, sino se debiere a que el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.”.*

2°) Que, de la norma antes transcrita, aparece con claridad meridiana que mediante el recurso de nulidad la Corte de Apelaciones se encuentra autorizada



para anular sólo la sentencia impugnada y dictar la de reemplazo correspondiente, si la causal por la cual se anula aquélla, no se refiere a formalidades del juicio, ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados —extremo que se cumple en la especie, pues se trata de la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal— y, además, que el motivo que acarrea la nulidad, obedezca a que el fallo de la instancia, hubiere calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, aplicando una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o impuesto una superior a la que legalmente correspondiere, situaciones que difieren a la de la sentencia dictada en la causa RIT 338-2022 por el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, que los recurridos invalidan, por la que se condenó al acusado por su responsabilidad como autor del delito de homicidio simple.

3º) Que, de este modo, los jueces recurridos, al anular la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto y dictar una de reemplazo, en vez de anular el juicio oral y ordenar que se celebre nuevamente por tribunal no inhabilitado, han cometido una falta grave que justifica acoger al recurso de queja en examen, toda vez que su conducta ha afectado las normas procesales que regulan el recurso de nulidad, pues prescindieron de la celebración de un nuevo juicio oral y dictaron una sentencia de reemplazo sin tener competencia para ello, defectos que sólo pueden ser corregidos por medio de este arbitrio disciplinario.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, **actuando de oficio** esta Corte, se decide que se deja sin efecto la audiencia de veinte de diciembre de dos mil veintitrés, celebrada ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el Rol



N° 3426-23, así como sus sentencias de nulidad y reemplazo dictadas el nueve de enero de dos mil cuatro en esa causa, debiendo tal tribunal proceder a fijar una nueva audiencia pública para conocer y resolver, por jueces no inhabilitados, el recurso de nulidad presentado por la defensa del sentenciado en contra el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, de tres de noviembre de dos mil veintitrés, en la causa RIT 338-2022.

Comuníquese por la vía más expedita esta resolución a la Corte de Apelaciones de San Miguel y al Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto.

Regístrese y archívese.

Rol N° 1.369-2024

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por En acuerdo ante la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por el Ministro Sr. Leopoldo Llanos S., Ministras suplentes Sras. Eliana Quezada M. y María Carolina Catepillán Lobos, Ministro suplente Sr. Juan Cristobal Mera M. y el Abogado Integrante Sr. Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro (S) Sr. Mera, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por Ministro Leopoldo Andrés Llanos S., Los Ministros (As) Suplentes Eliana Victoria Quezada M., María Carolina Uberlinda Catepillán L. y Abogado Integrante Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, catorce de febrero de dos mil veinticinco.

En Santiago, a catorce de febrero de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

